


## ALEGATOS DE CONCLUSIÓN - REPARACIÓN DIRECTA 2019-00013.

ROLANDO MUÑOZ <juridicotaminango@gmail.com>

Mar 11/04/2023 10:03

Para: Juzgado 09 Administrativo - Nariño - Pasto <adm09pas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (659 KB)

Alegatos de Conclusión Reparación Directa 2019-00013.pdf;

Doctora:

ANDREA MELISSA ANDRADE RUÍZ

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MOCOA

E. S.

D.

**REFERENCIA: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**PROCESO: REPARACIÓN DIRECTA No. 2019-000193**

**DEMANDANTES: LAURENTINO MARTOS NARVÁEZ Y OTROS.**

**DEMANDADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO, AMERICANA DE CONSTRUCTORES y  
HERNÁN MARTÍNEZ.**

**ROLANDO MUÑOZ MARTÍNEZ**, mayor y vecino de la Ciudad de Pasto, abogado titulado y en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.085.255.619 expedida en Pasto y portador de la Tarjeta Profesional número 239.751 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado judicial de la **ALCALDÍA DE TAMINANGO (NARIÑO)**, de conformidad al poder que en legal y debida forma me ha sido conferido por el señor alcalde **MILLER LEONARDO URBANO OJEDA**, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía número 89.001.872 de Armenia (Q, obrando en su calidad de Alcalde del Municipio de Taminango, Nariño, según consta en la certificación electoral del 30 de octubre de 2019 y posesionado mediante acta N° 02 de 2019 emitida por la Notaria Única del Circuito de Taminango (N), con el debido respeto por medio del presente escrito me permito presentar alegatos de conclusión en el proceso de la referencia.

Gracias.



Remitente notificado con  
[Mailtrack](#)



Doctora:

ANDREA MELISSA ANDRADE RUÍZ

**JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MOCOA**

E.

S.

D.

**REFERENCIA: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**PROCESO: REPARACIÓN DIRECTA No. 2019-000193**

**DEMANDANTES: LAURENTINO MARTOS NARVAEZ Y OTROS.**

**DEMANDADO: MUNICIPIO DE TAMINANGO, AMERICANA DE CONSTRUCTORES y HERNÁN MARTÍNEZ.**

**ROLANDO MUÑOZ MARTÍNEZ**, mayor y vecino de la Ciudad de Pasto, abogado titulado y en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.085.255.619 expedida en Pasto y portador de la Tarjeta Profesional número 239.751 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado judicial de la **ALCALDÍA DE TAMINANGO (NARIÑO)**, de conformidad al poder que en legal y debida forma me ha sido conferido por el señor alcalde **MILLER LEONARDO URBANO OJEDA**, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía número 89.001.872 de Armenia (Q, obrando en su calidad de Alcalde del Municipio de Taminango, Nariño, según consta en la certificación electoral del 30 de octubre de 2019 y posesionado mediante acta N° 02 de 2019 emitida por la Notaria Única del Circulo de Taminango (N), con el debido respeto por medio del presente escrito me permito presentar alegatos de conclusión en el proceso de la referencia en los siguientes términos:

**I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTO**

La **ALCALDÍA DE TAMINANGO (NARIÑO)**, entidad que goza de los siguientes atributos: personalidad jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio propio constitucionalmente consagrada, y de la cual es su actual alcalde el señor **MILLER LEONARDO URBANO OJEDA**, de quien he recibido el correspondiente poder para actuar.

**II. FUNDAMENTO DE LOS ALEGATOS**

Una vez analizado los fundamentos facticos, jurídicos y probatorios aportados por las partes del proceso, se debe concluir por este Despacho que en el presente caso concreto una decisión coherente con el actual ordenamiento jurídico debe derivar en el rechazo de las pretensiones de la parte demandante, para lo cual me permito ofrecer los consecuentes argumentos.

El problema jurídico planteado se centra en determinar la presunta responsabilidad civil extracontractual de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMINANGO, AMERICANA DE CONSTRUCTORES** y el señor **HERNÁN MARTÍNEZ** por los perjuicios causados a los señores **LAURENTINO MARTOS NARVAEZ** y **SANDRA VIVIAN MARTHOS** en ocasión a al deterioro de la vivienda particularizada durante el desarrollo del proceso.

En primer lugar, en lo que atañe a la excepción previa interpuesta por la compañía **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**, vinculada en el marco del llamamiento en garantía, de lo argumentado y probado en el presente proceso se evidencia que efectivamente se ha configurado la excepción previa de correspondiente a la caducidad del medio de control. Se allega a la mencionada conclusión bajo la consideración de que en el presente caso nos encontramos ante un daño instantáneo o inmediato de conformidad con la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado en esta materia.

Se debe anotar que el punto de partida, para un análisis de la presente naturaleza, debe ser de orden legal, específicamente a la luz del Numeral 2, Literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el cual consagra el termino de caducidad a considerar ante la presentación del medio de control de reparación directa:



*“i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.*

*(...)”.*

Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado<sup>1</sup>, ha precisado los alcances del concepto de “daño instantáneo o inmediato” y lo ha diferenciado del “daño continuado” de la siguiente manera:

**“En desarrollo de esto, la doctrina ha diferenciado entre (1) daño instantáneo o inmediato; y (2) daño continuado o de tracto sucesivo; por el primero se entiende entonces, aquél que resulta susceptible de identificarse en un momento preciso de tiempo, y que si bien, produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, él como tal, existe únicamente en el momento en que se produce (...)”.**

Por lo tanto, la contabilización del término de caducidad del medio de control de reparación directa debe hacerse en consideración a si el hecho generador del daño produce efectos perjudiciales inmediatos e inmodificables o, por el contrario, dichos efectos son mediatos. Lo anterior sin lugar a confundir el hecho generador del daño con la agravación del perjuicio.

En consecuencia, se desprende con meridiana claridad que el día 23 de enero de 2019, fecha en la que se interpuso el medio de control, la figura de la caducidad ya había operado, como bien puede evidenciarse en la contabilización de términos realizada por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA a partir del día 06 septiembre de 2016, fecha en la cual se terminó a entera satisfacción el contrato de obra, teniendo en cuenta que los demandantes aluden el daño causado a su indebida ejecución y vigilancia.

A su vez, en suerte de gracia, de realizarse una contabilización a partir del conocimiento del hecho generador del daño, es decir, del día 12 de octubre de 2016, fecha en la que se presenta derecho de petición en el que se manifiesta pleno conocimiento del hecho generador del daño, el medio de control interpuesto habría sido interpuesto fuera de la debida oportunidad procesal.

En segundo lugar, frente a la responsabilidad de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMINANGO frente a los daños presuntamente causados por AMERICANA DE CONSTRUCCIONES, debe manifestarse que de los hechos de la demanda y los medios de prueba expuestos en el transcurso del proceso, se concluye que no le asiste razón a la parte demandante en diversos aspectos, ya que la Alcaldía Municipal de Taminango actuó de conformidad con los procedimientos policivos a su alcance en un término de tiempo razonable, por lo tanto, el deber legal que le resultaba imputable no se observa claramente transgredido y, por ende, el nexo de causalidad entre dicho deber y los perjuicios causados no resulta claramente probado con los medios de prueba hasta el momento allegados.

Debe valorarse a su vez que el nexo de causalidad frente al daño sufrido por los demandantes se ve claramente comprometido por las actuaciones realizadas por un tercero, es decir, HERNÁN MARTÍNEZ, al interrumpir la ejecución de la obra y, por ende, originando la causa del hecho generador del daño. Es por lo anterior que dentro de los supuestos facticos probados, se logra denotar la existencia del fenómeno denominado hecho de un tercero como eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación, mismo que según la jurisprudencia<sup>2</sup> parte del supuesto inicial, según el cual, el causante directo del daño es un tercero ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad, enseñando de manera objetiva que no son terceros las personas a quienes además del demandado, la ley adjudica responsabilidad solidaria o indistinta y que por ende resultan obligados solidariamente, pues solo es tercero alguien extraño, por quien no se debe responder; es decir, no vinculado con el sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria,

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 18 de octubre de 2007. Radicación No: 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG). Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. Radicación No. 66001-23-31-000-1998-00409-01(19067). Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.



a efecto de afirmar la anterior argumentación referida, me permito expresarlo en los términos de la jurisprudencia.

Finalmente, sobre la responsabilidad de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMINANGO, se retoma la argumentación expuesta en la contestación de la demanda ofrecida por esta entidad en lo relativo a la responsabilidad de la empresa Americana de Construcciones como ejecutora del Contrato de Obra No. 005-L.P. 2014 y a la indemnidad que expresamente asumió contractualmente la empresa contratista frente a los daños ocasionados a terceros en virtud de la ejecución del contrato.

Se concluye que, al considerarse los parámetros desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en estas materias, así como la ausencia de material probatorio suficiente, no resulta posible concluir con suficiente certeza que se han configurado todos los elementos que requiere la imputación de responsabilidad a la Alcaldía Municipal de Taminango.

En tercer lugar, frente a los medios de prueba para la acreditación de los perjuicios sufridos debe manifestarse que los mismos no cumplen los estándares legales y jurisprudenciales necesarios, impidiendo el reconocimiento de dichos perjuicios.

Inicialmente, ante el documento denominado “informe pericial” y aportado por la parte demandante para acreditar la configuración del daño emergente debe desestimarse su valor probatorio sobre las afectaciones estructurales, ya que dicho informe no cumple con los estándares normativos determinados en los artículos 226 y 227 del Código General del Proceso y los artículos 218 y 219 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto no cumple con el catálogo de declaraciones e informaciones de acreditación del artículo 226 del Código General del Proceso que por remisión normativa se debe considerar según el artículo 218 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las cuales pueden agruparse de la siguiente manera: primero, la declaración de que el señor RICARDO ARTURO VILLOTA no se encuentra en alguna causal de impedimento; segundo, la justificación de idoneidad profesional y técnica; tercero, cuestionario punto por punto en un orden metodológico; y cuarto, la documentación de soporte que acredite lo anterior.

A su vez, debe considerarse que los testimonios solicitados de los señores MILTON ARROLLO Y JUAN BAUTISTA ERAZO MONTILLA no ofrecen cabal cumplimiento a los estándares normativos determinados en el artículo 212 del Código General del Proceso, por cuanto no se enuncian concretamente los hechos objeto de cada testimonio, salvo la caprichosa y amplia alusión a, abro comillas, “*para que explique todo lo que le conste sobre los hechos de la presente demanda*”, lo que resulta similar a no manifestar con debida precisión los hechos que se pretenden probar. Ya la jurisprudencia que ha desarrollado el Consejo de Estado sobre esta materia<sup>3</sup> ha determinado que este requisito es determinante procesalmente por dos motivos. Por una parte, se ha reafirmado que es necesaria la enunciación sucinta del objeto de la prueba testimonial (i) como presupuesto para verificar la licitud, pertinencia, conducencia y utilidad de la misma, y con el propósito de rechazarla en caso que se considere manifiestamente superflua o innecesaria, y (ii) como elemento que favorece el ejercicio del derecho de contradicción de la contraparte. En consecuencia, esta misma jurisprudencia nos permite inferir con claridad que no debe resultar de recibo para su Despacho el argumento relativo a que las pruebas testimoniales solicitadas por la parte demandante deben ser decretadas dada su relevancia o la claridad que aportarán al proceso, toda vez que con ello no se suple la falencia encontrada en materia de inobservancia de lo dispuesto en el artículo 212 del Código General del Proceso y, además, esa sería una percepción subjetiva que no puede constituirse en un parámetro para obviar los requisitos impuestos en las mismas normas adjetivas.

Finalmente, ante la supuesta configuración de daño moral no obra en el proceso prueba alguna que permita inferir su acreditación y, menos aun de conformidad con la cuantía propuesta, cuantía que ignora los criterios desarrollados por el Consejo de Estado al momento de aproximar la cuantificación de la misma.

---

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección 3A. Sentencia del 28 de mayo de 2013. Radicado: 1001-03-26-000-2010-00018-00(38455). Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección 3A. Sentencia del 11 de julio de 2012. Radicado: 13001-23-31-000-201 1-00248 01(43762). Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección 3B. Sentencia del 24 de febrero de 2014. Radicado: 25000-23-26-000-2010-00099-02(49777). Consejero Ponente: Danilo Rojas.



### III. PRETENSIONES

Considerando de que no podría fallar en favor del demandante debido a la configuración de que sus pretensiones han quedado desvirtuadas con lo probado en presente proceso y con lo surtido a lo largo del mismo, razón por la cual se hace necesario su señoría se declare en sentencia lo siguiente:

**PRIMERO.** Declárese la excepción previa de caducidad del medio de control interpuesto por las consideraciones allegadas a su Despacho.

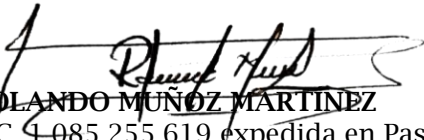
**SEGUNDO.** Subsidiariamente declárese la no prosperidad de la pretensión de declarar la responsabilidad civil extracontractual de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMINANGO, así como todas y cada una de las pretensiones del medio de control interpuesto derivadas de la misma, considerando los argumentos y medios de prueba allegados a su Despacho.

### IV. NOTIFICACIONES

La parte demandante la recibirán en los medios de contacto ya indicados en el desarrollo del proceso.

Las personales que me corresponden en la siguiente dirección: calle 19 N° 21-60, Edificio Puerta de Oro, Oficina 303 de la nomenclatura urbana de la ciudad de Pasto y a los correos electrónicos [contactenos@taminango-narino.gov.co](mailto:contactenos@taminango-narino.gov.co) y [juridicotaminango@gmail.com](mailto:juridicotaminango@gmail.com)

Del señor juez, atentamente



ROLANDO MUÑOZ MARTINEZ

C.C. 4.085.255.619 expedida en Pasto

T.P. 239.751 del C.S. de la J.

Correo: [roland.1985@hotmail.com](mailto:roland.1985@hotmail.com) - Registro Nacional de Abogados

Celular: 3015818525